

**XXXIII Congreso Internacional de Estudios Electorales
América Latina y el Caribe, elecciones y virajes políticos**

Título: Las implicaciones de las propuestas de reforma en materia político electoral en las obligaciones de transparencia y protección de datos personales de las autoridades electorales.

Autor: Lic. Ricardo Raya Aranda (CIPP/E).

Resumen: Los derechos fundamentales de acceso a la información y a la protección de los datos personales se encuentran reconocidos en los artículos 6o., apartado A, y 16 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del mismo modo, los derechos a votar y ser votado están previstos en el diverso artículo 35, fracciones I y II de la Carta Magna; mientras que los diversos 41, Base V, y 99 del mismo ordenamiento, establecen, básicamente, que la organización de las elecciones es una función estatal que desarrolla el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales y que el Tribunal Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, respectivamente.

En ese orden de ideas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados señalan múltiples obligaciones a cargo de las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales, como son, de manera enunciativa más no limitativa: la publicación y puesta a disposición de diversa información en sus respectivos medios electrónicos, así como la elaboración de avisos de privacidad y documentos de seguridad; lo anterior, con sus correlativas disposiciones en la normatividad aplicable en las entidades federativas a los tribunales electorales y organismos públicos locales, dentro de su ámbito de competencia.

En consecuencia, las propuestas de reformas en materia político electoral, recientemente presentadas en la Cámara de Senadores, sugieren, esencialmente, la eliminación de los “OPLEs” para adscribir sus funciones al actual Instituto Nacional Electoral, así como la desaparición de los Tribunales Electorales de las Entidades Federativas, para dar paso a la creación de Salas Locales; situación que tendría una importante repercusión en la cantidad de sujetos obligados y su ámbito de competencia, con la correspondiente carga normativa que deberán absorber los organismos que subsistan.

Por tal motivo, la presente propuesta de ponencia tiene como propósito analizar las principales obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales a la luz de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como las posibles implicaciones de las propuestas de reformas en materia político electoral. De tal forma, solicito a la coordinadora del Tema VIII. Cultura Política y Democracia, María Aidé Hernández García que, en caso de no existir inconveniente alguno, la presente ponencia pueda ser tomada en cuenta para su inclusión.